

INFORME JURIDICO SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN DE XX/XXX, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, POR LA QUE SE REGULA LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRIMERO. Naturaleza jurídica.

Los reglamentos son la manifestación del ejercicio de la potestad reglamentaria, que viene atribuida a las Comunidades Autónomas por la Constitución en virtud de los artículos 137 y 153.c) implícitamente, cuando se otorga a los tribunales el control de los reglamentos autonómicos. Con carácter general, una característica de los reglamentos es que tienen vocación de permanencia e innovan el ordenamiento jurídico.

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye en exclusiva la potestad reglamentaria al Consejo de Gobierno, y de acuerdo con la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, a éste le compete aprobar tanto las normas reglamentarias de desarrollo de las leyes, como aquellas otras de las que se deriven inmediatamente derechos y obligaciones para los ciudadanos.

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, en su apartado 1.c) establece la posibilidad que sean también que las personas titulares de las Consejerías ejerzan la potestad reglamentaria, dentro de sus competencias que tienen atribuidas. En este sentido, el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establece en su artículo 1 que a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes le corresponde diseñar y ejecutar la política regional en materia educativa, universitaria, cultural, deportiva, de juventud, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, conforme a los acuerdos del Consejo de Gobierno y a la legislación vigente, y en el artículo 2, se establece que corresponde a la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes la potestad reglamentaria en el ámbito de competencia de la Consejería.

SEGUNDO. Carácter del informe.

Se emite el presente informe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1.k) de la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el artículo 4.1 del Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

La emisión del presente informe tiene carácter preceptivo, por así disponerlo el apartado 5 del artículo 36 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo

TERCERO. Objeto de la orden

Según el artículo 1 de la orden, esta tiene como objeto regular la evaluación en educación secundaria obligatoria en los centros docentes de Castilla-La Mancha.

CUARTO. Contenido.

El proyecto de orden consta de título, una parte expositiva y una parte dispositiva, integrada por 33 artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. No se incorporan los anexos a los que se refiere el proyecto.

QUINTO. Observaciones.

Si bien el contenido de la norma se adapta, con carácter general, a lo establecido en el ordenamiento jurídico, se han de realizar las siguientes observaciones:

- En la parte expositiva de la orden, no es necesario mencionar nuevamente la modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, y además, tampoco es necesario la mención a esas normas porque realmente esta orden se aprueba en desarrollo del Decreto 82/2022, de 12 de julio, y en ejercicio de la habilitación normativa contenida en su disposición final segunda del mismo, por tanto, los 5 primeros párrafos pueden suprimirse.

-Sobre el sexto párrafo, se propone esta redacción:

“Tras la entrada en vigor del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de educación secundaria obligatoria, el Gobierno de Castilla-La Mancha, en desarrollo de aquel, ha aprobado el Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, desarrollando las enseñanzas mínimas y determinando los principios, características, competencias específicas y criterios de la evaluación en esta etapa.”

- Se propone que se incluya un párrafo independiente que especifique los órganos consultivos que ha intervenido en la elaboración de la orden. Se propone este texto. “En la elaboración de esta norma han participado el Consejo escolar de Castilla-La Mancha mediante la emisión del preceptivo dictamen y la Mesa Sectorial de educación no universitaria”.

- En cuanto a la fórmula promulgatoria, esto es el párrafo de enlace entre la parte expositiva y la dispositiva, se propone la redacción siguiente: “*En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la habilitación normativa establecida en la disposición final segunda del Decreto 82/2022, de 12 de julio, DISPONGO:*”

- En la parte dispositiva de la norma se incluyen títulos que separan los distintos artículos. Según Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, en estos casos, dichos títulos deben estar incluidos como capítulos de la norma.

Por ello, la primera frase de la parte dispositiva debería tener esta redacción: “CAPÍTULO I. Disposiciones generales”....

CAPÍTULO II, y así sucesivamente

- Al artículo 7.2 falta por incluir la referencia a la función de “coordinación del tutor o tutora”, que sí figura en el decreto 82/2022, de 12 de julio.
- Al artículo 15. La remisión al artículo 5.1 es errónea, es al artículo 19.5 del decreto 82/2022, de 12 de julio. Además, también es errónea la afirmación sobre que la consejería competente en materia de educación establece en el artículo 5.1(sic) del decreto, pues los decretos los aprueba el consejo de gobierno.
- Al artículo 24.1. La remisión al artículo 24.1 es errónea, es al artículo 34.1 del decreto 82/2022, de 12 de julio.
- Al artículo 25.1. El informe persona por traslado se elabora cuando el alumno se traslade a otro centro sin haber finalizado “la etapa” y no sólo antes de finalizar un curso. Además,

el segundo párrafo del apartado 1, reitera el contenido del artículo 19.2 de la orden, por lo que se propone la supresión de aquel.

- En el apartado 3, la subdivisión en letras: a) b) debe eliminarse signo ortográfico punto que figura tras el signo ortográfico:)
- Al artículo 31.9, dada la vocación de permanencia de la orden, la referencia a la delegación provincial debe ser a la competente en materia de educación. Además, se establece el plazo para interposición del recurso de alzada, que es un plazo que figura en la normativa básica: ley 39/2015, de 1 de octubre, por lo que no se considera adecuada su reproducción en la orden, reproducción por otro lado errónea pues el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , establece que :” *El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes* “ y el artículo 30.4 de la citada ley prevé que: 4. *Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate*”
- Al artículo 39.10, último párrafo. Dada la vocación de permanencia de la orden, la referencia a la delegación provincial debe ser a la competente en materia de educación. Además, se establece el plazo para resolución del recurso de alzada , que es un plazo que figura en la normativa básica: ley 39/2015, de 1 de octubre, por lo que no se considera adecuada su reproducción en la orden, reproducción que por otro lado es incorrecta pues el artículo 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , establece que :” 2. *El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.* ““
- Debe suprimirse el título de «**Disposiciones Adicionales**», pues después en cada una de ellas se contiene la misma denominación.
- El contenido de la **disposición adicional segunda** se hace referencia a la adaptación de los órganos de gobierno establecidos en la orden, cuando la orden no regula los órganos de gobierno.
- El contenido de la disposición adicional tercera.2. El artículo 9.3.b) mencionado solo prevé la exención para la enseñanza de bachillerato.
- En la **disposición derogatoria**, su título debe cambiarse por el de «disposición derogatoria única».
- En la **disposición final primera**, su título «desarrollo normativo», dado que no cabe desarrollo normativo de una orden, debe cambiarse por el de «Habilitación». Además, donde dice «Orden» debe decir «orden» -en minúscula-pues según las directrices de técnica normativa NO se escribirá con inicial mayúscula cuando en el texto de la disposición se haga referencia a la propia norma o a una clase genérica de disposición .
- En la **disposición final segunda**, «entrada en vigor», donde dice «Orden» debe decir «orden» -en minúscula-.

Esta disposición final segunda indica que dicha orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. No se prevé “vacatio legis”; ni se justifica en el expediente administrativo por qué no se cumple la regla general dispuesta en el artículo 36 de la Ley 3/1984, de 25 de abril, de Gobierno y de Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que estipula ‘Las disposiciones regionales entrarán en vigor a los 20 días de su entera publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que en ellas se dispusiera lo contrario’. Se aconseja respetar el período de “vacatio legis” necesario para la constancia y conocimiento de la norma en aras a la seguridad jurídica de

las personas destinatarias de la misma, o en la memoria justificativa motivar la procedencia de la entrada en vigor de manera inmediata ..

SEXTO. Procedimiento.

El procedimiento de elaboración de los reglamentos está básicamente regulado en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Así como el Acuerdo de 28/02/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para habilitar la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa a través del Portal de Transparencia de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En virtud de lo anterior, se deben tener presente la siguiente tramitación:

- En cuanto al contenido de la Memoria remitida, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece en su artículo 22 quinquies que “Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la infancia y en la adolescencia”.
- El proyecto de orden debe ser sometido al conocimiento del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha al regular aspectos concernientes a enseñanzas previas a la Universidad que afecten directamente al ejercicio efectivo del derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y al cumplimiento de las obligaciones que impone el artículo 27 de la Constitución Española a los poderes públicos de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación de Castilla-La Mancha.
- Asimismo, dado que la futura regulación puede afectar a las condiciones de trabajo del personal, se precisa que la norma se someta a conocimiento de la Mesa Sectorial de Educación de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1 k) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el artículo 151.1 j) de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
- Si la aprobación de la norma supone incremento de gasto para el presupuesto de la Consejería de educación, Cultura y Deportes, debe recabarse el informe de la DG de presupuestos, previsto en el artículo 22.1 de la ley 8/2021, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2022.
- En virtud del artículo 36 de la Ley 3/1984, de 25 de abril, sobre régimen jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Orden, para su entrada en vigor deberá publicarse en el DOCM.

En virtud de lo anteriormente citado, y corregidas las observaciones planteadas, se informa favorablemente el proyecto de Orden de la Consejería de Educación, Cultura y

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

En Toledo, a la fecha de la firma electrónica.

EL COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS.